

SAUL LANDAU

Regresos a Santiago

Primera ocasión: Chile, noviembre de 1970

Filmamos cómo el presidente saliente, el democristiano Eduardo Frei (padre), colocaba la banda roja, blanca y azul de la presidencia al nuevo presidente socialista, Salvador Allende. A continuación, Frei le dio a Allende, con gafas, un gran abrazo. El breve juramento consistió en la promesa de defender la ley y la Constitución. Luego llegó el desfile, en el que Allende iba saludando de pie desde una limusina descubierta, rodeado de guardaespaldas que avanzaban corriendo junto a oficiales del ejército a caballo.

En una fotografía un agente con casco, justo a la derecha (tras el vehículo de Allende), muestra una expresión de aburrimiento, o tal vez de ligero dolor. A caballo va el general Venezuela, oficial de uniforme y rostro grises que había urdido con la CIA un golpe para impedir la investidura de Allende. Posteriormente fue enjuiciado, pero su conspiración condujo directamente al asesinato del general Rene Schneider, comandante en jefe del ejército.

Socialistas de todo el mundo llegaron a Chile para ayudar a Allende en la implantación de reformas básicas. Hicieron escritos y organizaron grupos de apoyo y solidaridad para promover el primer experimento democrático social de importancia en el mundo de la posguerra. Allende soportó tres años llenos de conflictos, durante los cuales aumentó su popularidad pese a cometer graves errores y a ser objeto de una intensa campaña por parte de la CIA para acabar con su mandato, además de sufrir un recorte del crédito bancario que habría acabado prácticamente con cualquier nación del Tercer Mundo en dificultades. El presidente iba a anunciar un plebiscito el 18 de septiembre de 1973, Día de la Independencia. Los votantes chilenos decidirían si seguía o abandonaba el poder.

Pero no llegó a ocurrir. El 11 de septiembre, los trabajadores chilenos y los millones de personas que lo apoyaban contemplaron por televisión cómo los tanques rodeaban y bombardeaban el Palacio de la Moneda y los bombarderos Hawker Hunter lanzaban proyectiles contra el despacho de Allende.

Después llegaron diecisiete años largos y oscuros de dictadura militar. El sumiso y moderado Augusto Pinochet, que se unió a la conspiración en el último momento, superó con su lenguaje y comportamiento represivo a los fanáticos más entusiastas: 3.197 personas fueron ejecutadas por sus fuerzas de represión; 1.200 “desaparecieron”; más de 100.000 fueron víctimas de tortura, cientos de miles tuvieron que exiliarse.

Saul Landau es escritor, cineasta y profesor en la Universidad Politécnica de California. Fellow del Institute for Policy Studies (Washington) y el Transnational Institute (Amsterdam). Recibió el premio Edgar Allan Poe por su libro *Assasination on Embassy Row*, sobre el asesinato de Orlando Letelier.

Traducción: Ana Quintanilla

Mirando al pasado, resulta fácil decir que Allende no tenía ninguna oportunidad

Pinochet acabó con la Constitución, el Parlamento, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades libres; sus soldados prendieron hogueras con los libros que contenían la palabra “Marx”. Con el fin de ajustar la economía chilena de modo que agradara a los ricos y poderosos se trajo a los “Chicago boys” para que aplicaran su filosofía del libre mercado, que finalmente funcionó bajo el fascismo militar. Los intelectuales de Pinochet reescribieron los libros de texto, revisando la historia chilena para justificar el golpe como respuesta a la agresión soviética. Allende estaba, sin duda, al servicio de Castro y el KGB.

Bajo el régimen de Pinochet, las compañías chilenas y extranjeras arrasaron el medio ambiente. El Gobierno vendió o alquiló grandes áreas de su territorio a empresas madereras. La corrupción iba de la mano de casi todas las acciones, con la implicación de los propios hijos y del yerno de Pinochet. Éste subió los salarios de los oficiales y les dio grandes pensiones. Hasta entonces, los salarios en el ejército eran pobres. Bajo su régimen, los militares de alta graduación descubrieron que podían hacerse ricos participando en las operaciones de privatización.

Por último, a finales de los años ochenta la presión mundial, encabezada por Estados Unidos —que siempre abandona a su prole cuando ya ha cumplido su función— le obligó a convocar al voto. En el plebiscito de 1988 los chilenos votaron “No” a la continuidad de Pinochet. Después, en 1990, se celebraron elecciones presidenciales sucesivas, gobernando durante diez grises años de supuesta transición democrática.

La transición avanzó con lentitud debido a la negativa de los militares a abandonar las prerrogativas que habían adquirido: un presupuesto militar independiente, procedente de las ventas de cobre; un número de militares en el Senado suficiente para bloquear el cambio constitucional; limitaciones a la justicia... Pinochet decretó una amnistía para los delitos cometidos bajo su mandato y se nombró a sí mismo comandante en jefe del ejército hasta 1998 y senador vitalicio a partir de esa fecha.

En el año 2000, un socialista arrebató a un pinochetista el triunfo en las elecciones primarias y, por estrecho margen, en las generales. Resulta irónico que ninguno de los dos candidatos mencionara apenas el nombre de Pinochet. El derechista hizo una campaña populista. Lagos, socialista y allendista, mantuvo el compromiso con el libre mercado aunque también se comprometió a acometer reformas sociales. El socialista ganó por estrecho margen.

¿Se repetirá la historia, como una farsa, o se ha puesto fin al ciclo al pasar el relevo de la banda presidencial?

Mirando al pasado, resulta fácil decir que Allende no tenía ninguna oportunidad. Elegido con el 36,3% de los votos, el jefe del Gobierno de la Unidad Popular —constituida por cinco partidos de izquierda— tuvo que hacer frente a una clase propietaria hostil. Mediante una poderosa operación de desestabilización, respaldada por Estados Unidos, se trató de destruir la economía y el orden social; la ultrazquierda quiso forzar a Allende, parlamentario hasta la médula, a un enfrentamiento directo con la burguesía chilena. Al llegar septiembre de 1973 los dirigentes democristianos, que se habían comprometido a apoyar el proceso constitucional, pedían abiertamente una intervención militar.

Los tres años de presidencia de Allende parecen un estudio de manual sobre

la lucha de clases. Una hora después de que el presentador de la televisión chilena anunciara la victoria de Allende, me lancé a la calle con cámara y grabadora. En el distrito adinerado de Providencia —donde colgaban de los balcones millares de carteles y símbolos en apoyo de Arturo Alessandri, el candidato de derechas— la mayoría de los pisos y casas estaban a oscuras. Los carteles y pancartas de Alessandri habían desaparecido.

En la carretera del aeropuerto encontramos un atasco. “¿Dónde van todos?”, le pregunté a un hombre con expresión de pánico. Familia y pertenencias llenaban su automóvil; un caro sofá iba atado al techo de su Mercedes Benz. El hombre me dijo que las masas planeaban invadir Providencia y entregarse a la violación, el pillaje y el saqueo. Se iba con su familia a Buenos Aires. Otro coche cargado tenía como destino Londres. A varios kilómetros de distancia, los trabajadores estaban de celebración, bebiendo vino tinto y cantando. Desde luego, no pensaban dirigirse a Providencia para hacerse con la riqueza ilícita y exigir venganza. Salvador Allende introdujo reformas sociales fundamentales y comenzó a aplicar un programa socialista legítimamente, pese a un poder judicial antagónico, un poder legislativo que no cooperaba, una prensa anti-izquierda y un Gobierno estadounidense decidido a derrocarlo. ¿Temían el presidente Nixon y Kissinger —su asesor en cuestiones de seguridad nacional— que tuviera éxito y presentara al mundo un modelo de legalidad democrática y socialista?

Los tiempos han cambiado; para el socialismo y para Pinochet.

Segunda ocasión: 11 de marzo de 2000

Contemplé cómo el presidente democristiano Eduardo Frei (hijo) le colocaba la banda presidencial al presidente electo, el socialista Ricardo Lagos. A continuación llegaron los abrazos, los juramentos, la efusiva bienvenida: igual que en 1970. Los socialistas y progresistas comenzaron a observar de nuevo con expectación. ¿Se convertiría Lagos en otro acólito de Clinton, la versión tercermundista de Tony Blair? ¿O haría resucitar el socialismo chileno, dentro de los límites obvios impuestos por los tiempos y la historia de los últimos 27 años?

No acudí a la investidura el represor, Augusto Pinochet, ahora de 84 años de edad. Pinochet había regresado hacía una semana, después de permanecer detenido durante 503 días. Un juez español había ordenado su detención en el Reino Unido y, a continuación, había solicitado su extradición a España por los cargos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo.

Imaginen el despertar de Pinochet tras la anestesia —se sometió a una operación de espalda en Londres— cuando un hombre alto, que se identificó como agente de policía, acompañado de un intérprete, le comunicó: “Queda usted detenido. Tiene derecho a solicitar un abogado, todo lo que diga podrá ser utilizado (...)”.

El general Pinochet —que había pisado fuerte sobre la alfombra roja de la sala VIP en Heathrow, había tomado té con Lady Thatcher (su alma gemela), había ido de compras a los almacenes Harrods y había cenado en los restaurantes más elegantes de Londres— ingresó en la clínica como un excursionista feliz y salió preso. La policía metropolitana instaló cámaras de televisión hasta en el cuar-

to de baño de su casa de alquiler y alojó a agentes de policía en las habitaciones contiguas a la que el general compartía con Lucía, su esposa.

Este masón mediocre, que tenía un suegro político socialista, había dirigido un golpe militar sangriento contra Allende para regir Chile con mano de hierro durante 17 años. Había apuntado su pistola a la cabeza del Gobierno civil electo al renunciar en 1990, tras perder el plebiscito. Les obligó a aceptar la amnistía que se había otorgado a sí mismo y a sus matones y, también, a aguantarle como comandante en jefe del ejército otros diez años. Y, cuando se retiró por fin de este cargo en 1998, con el fin de garantizarse seguridad de por vida, organizó su propio nombramiento como senador vitalicio, posición que añade un grado más de inmunidad.

Una semana antes de la toma de posesión de Lagos, Pinochet —que salió de Chile como el rey del mundo— regresó como paria. El comandante en jefe se había convertido para gran parte del mundo en el criminal en jefe.

Hasta su detención en Londres, Pinochet creyó estar totalmente a cubierto. Pero los muertos, a veces, sí hablan. Se han presentado setenta y cinco denuncias contra él en Chile, en nombre de las víctimas “desaparecidas”. El juez Guzmán Tapia admitió las denuncias y ha comenzado a citar a los testigos. Si la desaparición significa secuestro, se trata de un delito que aún perdura. Pinochet hizo desaparecer personas como forma de engañar a los grupos observadores de derechos humanos: una persona desaparecida, a diferencia de una persona detenida y acusada, no queda registrada.

En su celo por acabar con los opositores que mejor le conocían, Pinochet fue más allá de los límites tácitos que hasta la CIA marca a su prole. Los funcionarios de la CIA y del Departamento de Estado en Chile informaron debidamente a Washington sobre el hecho de que Pinochet —considerado en el pasado ligera o completamente neutral en el terreno político— se había convertido en un fanático. Washington no objetó formalmente a las ejecuciones rutinarias, incluida la legendaria “caravana de la muerte”, operación mediante la cual un general, Sergio Arellano, a las órdenes de Pinochet, condujo una especie de escuadrón de las SS alemanas por las ciudades del norte de Chile, ejecutando sistemáticamente a los líderes de la oposición política. Washington tampoco le exigió poner fin a la tortura rutinaria de decenas de miles de opositores. “Planificada dura represión —señalan las primeras palabras de un telegrama enviado por el Departamento de Estado en 1973—. El ejército está reuniendo a un elevado número de personas, entre ellas estudiantes e izquierdistas de todo tipo, y las está recluyendo. En la Universidad Politécnica se dio muerte a 300 estudiantes (...)”. Un telegrama de la CIA, del 26 de octubre de 1973, informa sobre el plan de Pinochet de “acabar con toda resistencia en dos meses como máximo —y continúa— Para ello, el ejército tendrá que seguir matando (...)”.

Otro telegrama, del 5 de febrero de 1973, menciona que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) utiliza técnicas “adoptadas directamente de la Inquisición española, que dejan con frecuencia a la persona sometida a interrogatorio con patentes lesiones corporales”.

El embajador de Estados Unidos, Nathaniel Davis, solicita, en un informe del 27 de septiembre de 1973, un puesto de “asesor (...) cualificado para la creación

de un centro de detención de personas que permanecerán detenidas por un periodo de cierta duración. (...) El asesor debe disponer de conocimientos sobre la creación y funcionamiento de centros de detención”. Davis sugiere que el Departamento de Estado envíe tiendas de campaña, mantas, etc., “que no requieren estar asignadas de manera pública y específica a los presos, de modo que evitemos admitir que estamos equipando campos de concentración chilenos”. Pinochet había internado a ex ministros del Gobierno de Allende en un campo de este tipo próximo al Polo Sur. Aquéllos que habían allanado el camino para el golpe y brindado su apoyo a la solución militar dieron luz verde a Pinochet para matar y torturar. Los barcos espía que la Marina estadounidense tenía cerca de las costas chilenas, y que se encontraban oficialmente de maniobras rutinarias, vigilaban las comunicaciones de las bases militares. En el caso de que algunas unidades hubieran permanecido leales al Gobierno democrático de Allende, la Marina lo habría notificado a los golpistas para que enviaran una fuerza capaz de reprimirlos, evitando de esa forma una guerra civil.

Una vez que alcanzó el poder, Pinochet adoptó como guía la palabra represión. Sufrió con el poder un cambio de personalidad y ordenó sin piedad la ejecución de sus enemigos en potencia. Mostró una inclinación especial por perseguir a los ex ministros de Defensa y otros altos cargos que habían visto su expediente personal y que, asimismo, le habían escuchado pronunciar sus continuos juramentos de lealtad eterna.

Los ministros de Defensa muertos

José Toha, ministro de Defensa, socialista y caballero, enfermó después de ser recluido por Pinochet en un campo de concentración —sin presentar cargos contra él—. Toha, enclaustrado en su cama, sin fuerzas ni para ir al baño, fue hallado colgando de la barra del techo en un hospital, ahorcado con su propia corbata.

El general Carlos Prats, ministro de Defensa y ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas —cuya renuncia permitió a Pinochet ocupar el cargo en agosto de 1973— resultó muerto en un atentado con coche bomba que lo hizo saltar, con su esposa, a una altura de nueve pisos en Buenos Aires, donde se había autoexiliado. Los agentes del FBI averiguaron que los servicios de espionaje de Pinochet habían planeado la muerte.

Dos generales del alto mando murieron también en extrañas circunstancias durante los primeros años del régimen de Pinochet. El general Lutz murió, de forma nunca aclarada, después de ser conducido contra su voluntad a un hospital militar. El general Bonilla murió en accidente de helicóptero. Ambos habían criticado el excesivo celo con el que se llevaba a cabo la represión.

En 1975, la policía secreta chilena contrató en Roma a un sicario fascista para que disparara contra Bernardo Leighton, líder democristiano en el exilio. El asesino a sueldo le incrustó a Leighton una bala en la cabeza, y otra a su esposa. Aunque los dos sobrevivieron, nunca llegaron a reponerse. El FBI descubrió que el pistolero, Stefano della'Chia, visitó a Pinochet tres meses después en Madrid, donde éste asistía al funeral de Franco.

Los agentes del FBI averiguaron también, a finales de los setenta, que la CIA

había bloqueado otros dos homicidios de la DINA programados en 1976, uno en España y el otro en Portugal. “No jueguen de nuevo con nuestros socios de la OTAN”, venía a decir la agencia a su contraparte chilena. Pero la DINA había extendido su largo brazo hasta el extranjero con pleno conocimiento del espionaje estadounidense. De hecho la Operación Cóndor, nombre con el que se conoce la maquinaria asesina en el extranjero, contó con agentes estadounidenses en varias de sus operaciones.

El golpe más audaz: atentado en Washington

Orlando Letelier se convirtió, en agosto de 1973, en el último ministro de Defensa de Allende. Su viuda aún conserva un regalo de Pinochet, un caro plato de cobre con el siguiente mensaje grabado: “A Orlando e Isabel, con lealtad y afecto eternos, Augusto y Lucía”. Tras el golpe, Pinochet deportó a Letelier —sin cargos— al campo de concentración de Isla Dawson.

En otoño del año siguiente lo dejó en libertad, debido a la presión del ministro venezolano para el petróleo, que mantenía una estrecha amistad con Letelier. Éste se trasladó junto con su familia a Washington, donde había aceptado una beca del Institute for Policy Studies (IPS). Allí dedicó todo su tiempo a restaurar la democracia en Chile.

Los atentados contra Prats en Argentina y contra Leighton en Roma fueron actos audaces. Pero en junio de 1976, Pinochet ordenó al jefe de su policía secreta que acabara con Letelier. Cuando éste se dirigía en su automóvil al IPS junto con su colega Ronni Moffitt, cubanos anticastristas contratados por la DINA accionaron el control remoto e hicieron detonar la bomba que habían colocado bajo el vehículo. El FBI siguió el rastro de los homicidios hasta el jefe de la DINA, el coronel Manuel Contreras y su subdirector de operaciones, el teniente coronel Pedro Espinoza. Esta acción por sí sola, entre todos los homicidios, tal vez sea la clave de la caída de Pinochet. ¿De dónde se sacó Pinochet la audacia para autorizar un acto tan imprudente?, se preguntaron los agentes del FBI.

La posible respuesta les sorprendería. El 8 de junio de 1976 Kissinger dijo, durante una visita a Chile, que Pinochet estaba preocupado. Kissinger, según los medios de comunicación —a los que él mismo había manipulado— había acudido al país para hablar ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la cuestión de los derechos humanos, tema en el que estaba tan versado como Pinochet. Kissinger comunicó al general que el discurso que pronunciaría al día siguiente trataría de los derechos humanos; sin embargo, Pinochet debía comprender que el discurso no estaba dirigido a su Gobierno. El acta oficial de esta conversación cita la siguiente afirmación de Kissinger: “tenemos una disposición favorable a lo que están tratando de llevar a cabo”. Durante la conversación, Kissinger pasó a considerarlo “víctima de todos los grupos izquierdistas del mundo”. Y continuó: “deseamos suerte a su Gobierno”.

Pinochet se quejó dos veces de Orlando Letelier. Kissinger hizo oídos sordos a los comentarios y le dijo: “apoyamos sus métodos [de Pinochet]”. En sus memorias, Kissinger recuerda la reunión como un encuentro en el que dio a Pinochet una severa lección sobre derechos humanos.

¿De dónde se sacó Pinochet la audacia para autorizar un acto tan imprudente?

La celebración

La escena rememorada acaba aquí. El domingo 12 de marzo de 2000 me uno a las 250.000 personas (en su mayoría jóvenes de 18 a 25 años de edad) que están de celebración en el Parque Forestal, en el centro de Santiago. Lagos hablará por la tarde. Hasta entonces hay música y baile. Ondeán pancartas que exigen el enjuiciamiento de Pinochet. Contemplo cómo jóvenes tatuados y perforados se pasan botellas y porros. Cada pocos minutos, hay grupos que se levantan de la hierba y del familiar olor, dulce y a humo, para gritar “Juicio a Pinochet”. Una joven de dieciocho años llevaba una pancarta con el rostro de Allende. “¿Qué significa para ti?”, le pregunté. “Libertad —me dijo sin vacilar—. Significa justicia social y el fin de los horribles y oscuros años de fascismo militar y de los diez años de la llamada transición a la democracia de los democristianos”. “Sí —corroboró un joven de Antofagasta que bebía alcohol peleón con un amigo, mientras sostenía un cartel de Lagos con el mensaje “Di no a las drogas”—. Queremos democracia real, libertad real”.

Seis meses antes, fumar marihuana habría significado una rápida detención y una larga condena de cárcel. “Un día después de la investidura de Lagos, es hora de independizarse de los años estrechos —dijo una joven de pelo rosa—. Es hora de que los jóvenes salgamos de nuestro encierro y creemos nuestra propia libertad”.

“Juicio a Pinochet”, empezaron a gritar, saltando y riendo.

“Ridículo —dijo una de las personas mayores que observaban la escena—. El ejército no permitirá nunca que lo juzguen”.

“Miedo —respondió Carolina, de diecinueve años, una estudiante universitaria que se adornaba con un pendiente el labio perforado—. Pinochet ha cubierto el país con la manta del miedo. Pero ahora, después de su detención en Londres y de que cuatro países han solicitado su extradición, ya no me da miedo, ni a mí ni a mis amigos. Igual somos demasiado jóvenes. No conocimos los asesinatos, las desapariciones, la tortura, la sensación constante de terror que producía la vieja policía secreta”.

La mujer mayor calló; sus labios dibujaron una tenue sonrisa. “Tal vez”, sólo dijo. Quizá se refería al candidato Lagos, que apuntó al ejército chileno al advertirle de que no se extralimitara y más adelante, en el transcurso de la noche, dijo desde el balcón del palacio presidencial que los chilenos “siempre recordarán a los traidores que bombardearon el palacio”. Pidió la erradicación de los “enclaves autoritarios” que perviven en la Constitución de Pinochet y declaró su intención de completar la transición del Gobierno militar al civil. Quizá se refería al impulso reciente del Ministerio de Justicia para reabrir el caso Letelier. De hecho, la fiscal general Janet Reno representó al Gobierno de Estados Unidos en el acto de investidura y se reunió con Hortensia Bussi —viuda de Allende— y con Sofía Prats, hija del general asesinado. El embajador de Estados Unidos, por su parte, recibió a Isabel Morel (viuda de Letelier) y a su hijo Juan Pablo, actualmente parlamentario socialista en el Congreso Nacional. El FBI ha enviado un río de agentes a Chile para interrogar testigos. Durante la primera semana del mandato de Lagos, Chile aceptó el exhorto de Estados Unidos en el que pedía ayuda para interrogar a 42

testigos —en su mayoría militares o ex militares de alta graduación y agentes de la policía secreta— en relación con el asesinato de Letelier. Un jurado de acusación se reúne en Washington para examinar las pruebas presentadas por el fiscal adjunto estadounidense. Como mínimo, podría dictaminarse el procesamiento de Pinochet por obstrucción a la justicia. Es posible que pronto aparezcan agujeros en su escudo de inmunidad.

Salieron a la luz nuevos documentos, uno de ellos firmado por el brigadier Pedro Espinoza, ex número dos de la DINA. Los documentos indican el encubrimiento del asesinato de Letelier, por cuya planificación fue condenado Espinoza. Éste invoca el nombre de Pinochet como autor del asesinato. Bélgica, Francia, Suiza y España han solicitado su extradición para juzgarle por crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo.

En su primera semana en el poder, Lagos eliminó el servicio militar obligatorio, que quedó reemplazado por un ejército de voluntarios asalariados. También se comprometió a restaurar la infraestructura que consiguieron los trabajadores chilenos tras más de un siglo de lucha. Lagos prometió reformar los “nocivos legados de la dictadura militar que restringen el ejercicio de la democracia”, como los nueve escaños vitalicios del Senado que el Estado Mayor se asignó sin votación.

Lagos ya ha adoptado medidas legislativas para apoyar a los desempleados y fortalecer la Seguridad Social. Pero, a diferencia de Fidel Castro en Cuba y del presidente Hugo Chávez en Venezuela, no modificará el modelo de libre mercado. Con Lagos, las clases trabajadoras de Chile pueden recobrar su memoria de lucha y comenzar de nuevo a hacer su propia historia, aunque con las enormes limitaciones que impone nuestra época y, desde luego, al margen de la vía que habían elegido antes de que el golpe militar concebido en Washington y en los ricos salones de juntas de Santiago modificara el curso de su destino histórico.